

De la Arqueología de la mortadela a la Arqueología de la resistencia. La democratización fallida de la Arqueología española

Jorge Morín de Pablos - Rafael Barroso Cabrera

AUDEMA S. A. Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales

Se nos pregunta desde la dirección de la revista: “*Arqueología: Para qué, para quién, cómo y por qué*”. Cuatro preguntas que, en principio, deberían obtener una fácil respuesta en una disciplina centenaria como la arqueología.

¿Para qué? Para conocer mejor nuestro pasado, para comprender el presente y diseñar el futuro de nuestra sociedad. Un conocimiento que viene dado a través del estudio de la cultura material que han generado las distintas sociedades humanas y de la inserción de los objetos en los yacimientos y de éstos en los paisajes culturales, superando la visión de la arqueología ceñida al objeto, algo que, por sorprendente que aún pueda parecer, todavía sigue sin asimilarse del todo en nuestro país.

¿Para quién? Obviamente el arqueólogo trabaja por motivaciones puramente personales, que van desde inquietudes personales a modas y vanidades propias de la condición humana, pero sin perder nunca de vista el hecho de que el arqueólogo trabaja para la sociedad en su conjunto: desde las comunidades locales, donde realiza su trabajo en un primer nivel, a los foros científicos y la divulgación de los resultados de sus estudios con destino a un entorno globalizado. Una labor de difusión que, a día de hoy, resulta mucho más fácil de realizar para el arqueólogo y, sin duda, mucho más asequible al gran público gracias a la revolución que ha su-

puesto para nuestro mundo el desarrollo de Internet.

¿Cómo? La práctica arqueológica puede ser desempeñada en el sector público o privado. En lo público, en la universidad, museos o institutos de investigación como el CSIC; en el sector privado, en empresas de arqueología, fundaciones, etc. Pero tanto en uno como en otro caso la práctica de nuestra disciplina debe ir siempre ligada a la investigación.

En efecto, es la investigación científica la que faculta el desarrollo de una práctica de la disciplina de manera correcta, que sea realmente crítica y ética a la vez. En realidad, si no hay investigación resulta difícil, diríamos imposible, realizar una práctica de nuestra disciplina que no esté anquilosada. No vamos a entrar en el debate estéril de la existencia de una investigación ligada al mundo universitario, por un lado, y otra “profesional” o de gestión, que se asocia comúnmente a la práctica privada. En términos generales, en los dos ámbitos, público o privado, resulta factible desarrollar el ejercicio de la profesión, si bien en ambos casos también la ausencia de una auténtica labor de investigación viene siendo, por desgracia, una constante. No descubrimos nada nuevo al afirmar que la arqueología en España es, en gran medida, ágrafa y, lo que es aún peor, pueden contarse por miles los ejemplos de ausencia absoluta de investigación. De hecho, no hay más que ver la escasa influencia de la arqueología española –salvo las

raras excepciones personales que todos conocemos y que cada cual cree encarnar— en el concierto internacional.

En realidad, a día de hoy el crédito de la arqueología española en el mundo académico internacional es prácticamente inexistente. A diferencia de otras disciplinas, como la historia o la epigrafía, donde es fácil encontrar profesionales y estudios reconocidos en el ámbito internacional, el papel de la arqueología española es prácticamente nulo y se limita a proporcionar datos que luego son procesados por investigadores extranjeros. Y eso en el mejor de los casos, porque la realidad es, en demasiadas ocasiones, la simple ignorancia de los trabajos realizados en nuestro país. A ello ha contribuido sin duda la regionalización de los estudios y la falta de una dirección conjunta de los proyectos de investigación, pero también, no cabe duda, la desidia de los que se supone son profesionales del sector.

¿Por qué? En un mundo postmoderno, en el que parece que toda la información está en la red, resultan cada vez más obvias las inmensas carencias que aquella presenta. A ello se suma una peculiaridad excepcional del registro arqueológico, a saber: sigue siendo una fuente de información para la reconstrucción histórica no sujeta a manipulación (al menos no en la medida que presentan las fuentes documentales) ni en el pasado ni en el presente (pues a nadie se le ocurriría manipular nuestra “basura” para desorientar a unos hipotéticos arqueólogos del futuro). De hecho, si un arqueólogo del futuro estudiara el “paisaje del boom económico” de la última década, le resultaría fácil elaborar un SIG con las infraestructuras diseñadas, el inmobiliario construido, etc. Un panorama ciertamente complejo, pero cuyo estudio podría abordarse de manera muy semejante a como un arqueólogo clásico afronta en la actualidad el estudio de la “crisis del III d.C.”.

Para muchos de nosotros, la arqueología nació como una vocación temprana, cuyo impulso nació en una etapa precoz de nuestra existencia, posiblemente durante la juventud o, incluso, en la misma niñez. Nuestra visión de la disciplina lógicamente fue variando con el estudio y la práctica de la misma, aunque, en nuestro caso personal, siempre nos ha guiado el interés por el conocimiento del pasado y el deseo de transmitir ese conocimiento a la sociedad en la que vivimos y que, en no pocas ocasiones, es la misma que nos paga. Somos conscientes que la práctica de la disciplina arqueológica va ligada a un comportamiento ético, que desgraciadamente muchas veces no existe o no se da en la medida que debiera darse. Asimismo, somos plenamente conscientes de que la sociedad generada por el capitalismo postmoderno, embarcada en la construcción de un utópico futuro de felicidad y democracia completas, apenas tiene memoria o la tiene de forma muy selectiva. Pero es precisamente por esta razón por la que sigue intacta la necesidad de disciplinas como la nuestra, cuyo ejercicio resulta todavía más necesario ya que, mucho mejor que cualquier otra, sirve para reflejar el pasado tal como fue, con sus errores y sus aciertos.

A lo largo de estos años hemos tenido la fortuna de poder escribir más de medio centenar de libros y alrededor de quinientos artículos en diversas revistas o congresos. Obviamente nuestro propósito ha sido siempre publicar dichos estudios en revistas científicas indexadas, pero tampoco hemos tenido reparo en acudir a publicaciones de ámbito local o de tipo generalista que acercaran la investigación al gran público. Puede que esto último no sea del gusto de los círculos académicos españoles, tan a menudo encerrados en una cómoda torre de marfil bajo la fácil excusa de la investigación, pero realmente a nivel personal, no cabe duda que ha sido una experiencia ciertamente gratificante. En la actualidad, sin embargo, nuestra labor de

investigación sobrevive más gracias a la amistad de arqueólogos a los que mueven los mismos valores, que al interés de las instituciones encargadas de la investigación arqueológica.

Y es que, a pesar de la imagen idílica que algunos puedan tener aún, resulta evidente que la arqueología española no ha vivido una auténtica democratización de sus estructuras. La práctica de la arqueología en España sigue realizándose de forma jerarquizada y clientelar, lo que impide en la mayoría de los casos un desarrollo de la disciplina con visión crítica. Ese es, a nuestro juicio, uno de los muchos –quizás el principal– problemas de la disciplina en la actualidad. El modelo desarrollado en el franquismo, que se empezó a fraguar inmediatamente después de la guerra civil, se ha perpetuado en el tiempo de una manera casi arqueológica. De hecho, la estructura del Estado franquista se mantuvo sin apenas variación hasta los inicios de los años ochenta, por lo que hasta entonces la práctica de la disciplina continuó ligada exclusivamente al mundo universitario y a los museos, instituciones que se encargaban de realizar las excavaciones en los diferentes yacimientos de nuestro país. Aunque entonces se puso en marcha un programa anual de publicación de memorias de excavaciones, el modelo pronto entró en barrena, siendo la práctica común la realización de campañas anuales sin la publicación de las preceptivas memorias y, lo que es aún peor, la inexistencia de proyectos que planteasen a priori qué problemas históricos se pretendían estudiar en cada campaña de excavación.

El sistema fraguado en los años del franquismo se perpetuó, corregido y degenerado, arrastrando los evidentes defectos del mismo y, por el contrario, ninguna de sus ventajas (que también las tuvo, todo hay que decirlo). La práctica en general iba ligada a excavar y a publicar lo que se descubría. Así, en el mundo

romano se excavaban los edificios de espectáculos, porque existían posibilidades de descubrir mejores y más vistosos materiales, al tiempo que se despreciaban otras áreas del yacimiento o los niveles contemporáneos, modernos, medievales e, incluso, los tardoantiguos. Esta praxis produjo sin duda un atraso con respecto a las nuevas tendencias de la arqueología, sobre todo a partir de mediados de la década de los 60. A partir de esa fecha es cuando las carencias del sistema creado en la posguerra se hicieron patentes y cuando debieron acometerse reformas en el mismo destinadas a corregirlas. Unas reformas que, sin embargo, no llegaron nunca a efectuarse y que, de forma lamentable, han perpetuado y extendido hasta la actualidad los defectos del sistema como si de un tumor maligno se tratara.

Esta mecánica no se justifica sólo por el aislamiento del país durante la dictadura, puesto que en los años sesenta y setenta dicho aislamiento era ya cosa del pasado y además, como decimos, se perpetuó después de la muerte de Franco, sino por el modelo generado, que era vertical e inmovilista. Es decir, porque se trataba de un modelo donde no se premiaba a los mejores, sino a los más dóciles. Por increíble que pueda parecer, todavía en nuestros días hay directores de yacimientos del postfranquismo que siguen “dirigiendo” yacimientos vitales para procesos históricos sin haber publicado jamás una Memoria de excavación ¿Cómo explicar esto en un país de la UE en pleno siglo XXI? En nuestra opinión, esto sólo tiene su explicación en la pervivencia del sistema clientelar en las instituciones encargadas de velar por el desarrollo de la investigación. Esta responsabilidad atañe de forma muy especial –debido a la forma como se ha gestado el modelo español de investigación– al ámbito universitario.

Durante años se ha seguido con la práctica de una disciplina anclada en una meto-

dología casi decimonónica. En la formación de los estudiantes ha primado la visión teórica de la disciplina, mientras que las escasas prácticas ejecutadas en los yacimientos se realizaban a cambio del alojamiento y manutención. En esos años de transición era habitual recibir un bocadillo de mortadela sevillana, en corte fino, casi traslúcido, a razón de tres o cuatro lonchas en media pistola de pan, a cambio de mano de obra barata y poco dispuesta a la rebelión. Esto puede dar una idea cabal del nivel de la práctica de la disciplina arqueológica en nuestro país de aquellos años de la década de los 80, ahora tan celebrada. Uno de los que aquí suscribe todavía recuerda el “shock” que le produjo su estancia en la Universidad de Siena en el año 1987, no sólo por la comida (que era excepcional), ni el alojamiento (en un convento renacentista), sino por contar con una cartografía sobre fotografía aérea a escala 1:1000, un ordenador portátil, etc. Y, lo que era más importante, la práctica de una disciplina con una visión crítica que cuestionaba los modelos existentes y generaba unos nuevos. Allí un alumno de segundo de carrera podía discutir con el catedrático, ya que lo que movía la investigación no era la perpetuación de un modelo asumido, sino la crítica y el debate continuo.

El desarrollo del Estado de las Autonomías (diecisiete Comunidades Autónomas, todas y cada una de ellas ansiosas de reescribir su historia nacional, con sus respectivos héroes y batallitas que dieran lustre al ente en cuestión) supuso el traslado de las competencias en materia de arqueología desde el Estado a los diferentes gobiernos autonómicos. Más decisivo si cabe fue el evidente desarrollo económico del país, que generaba continuas intervenciones de urgencia cuya gestión desbordó la capacidad de las instituciones implicadas en el estudio arqueológico, principalmente universidades y museos. En ese momento la Comunidad de Madrid generó un modelo –que posteriormente fue cal-

cado por el resto de las Comunidades– en el que se dejaba en manos de la iniciativa privada la gestión de estas intervenciones. Ese es, a grandes rasgos, el modelo que ha pervivido en nuestro país en los últimos treinta años.

Con el desarrollo del modelo, pareció en un primer momento que se generaban nuevos profesionales fuera de la universidad y del mundo de los museos, y que con ello se iban a revitalizar definitivamente las estructuras de la anquilosada arqueología española. Sin embargo, pasada la euforia de los primeros momentos, a día de hoy siguen sin percibirse en el horizonte claras señales de transformación del sistema. Al fin y al cabo, y como tantas veces ocurre en España, la llamada “arqueología de gestión” fue concebida como un parche provisional destinado a solucionar un problema que el sistema, por su inmovilismo, era incapaz de afrontar. Con la crisis, el parche saltó por los aires, y mientras se desinflaban las burbujas inmobiliaria y viaria, se desvanecía también el sueño de una arqueología de gestión al margen de las instituciones oficiales.

Pero este no era el único problema que debía la arqueología de gestión privada. Un punto importante fue que la creación de los primeros organismos autonómicos se nutrió de los elementos más inoperantes que el sistema clientelar no había sido capaz de asimilar en la universidad. Ciertamente es que con el paso del tiempo se han ido incorporando arqueólogos que han ganado su plaza en una oposición pública, y de cuya competencia no es posible dudar, pero en la mayoría de los casos estos profesionales no ocupan puestos de responsabilidad en el sistema, casi siempre copados por los “arqueólogos” de la primera hornada. Si el sistema desarrollado hasta entonces era, por decirlo de alguna forma, “feudal”, en algunas autonomías derivó en un sistema cuasi-mafioso, donde los intereses particulares y económicos primaron sobre

el conocimiento, la investigación y la salvaguarda del patrimonio. Es innumerable la lista de Comunidades con responsables en el área de arqueología que tenían empresas, bien ellos directamente o a través de interposición de familiares que actuaban como testaferros. Esta situación se puede apreciar con claridad en la legislación de las últimas décadas. Sin excepción alguna, todas las Comunidades Autónomas han desarrollado su propia legislación en materia de Patrimonio Arqueológico (en algún caso incluso ya van por su tercera ley). Sin embargo, son aún escasas las Autonomías que han dado a luz los Reglamentos que permiten eliminar los comportamientos arbitrarios. En estas condiciones, en la mayoría de los casos la práctica de la arqueología de gestión se desarrolló dependiendo del criterio del técnico responsable de la actuación, con los obvios los problemas que se derivan de una situación así.

Por otro lado, hay que ser también crítico con los “arqueólogos” que llegaban a nutrir el nuevo nicho del mercado arqueológico. “Arqueólogos” muchas veces pésimamente formados desde el punto de vista teórico y sin experiencia práctica alguna, totalmente ágrafos, que pasaron a dirigir y a participar en “excavaciones” arqueológicas, que repitieron lo que el modelo venía haciendo desde medio siglo antes, pero ahora a gran escala. Llegados a este punto se abre otro problema: ¿Son realmente los arqueólogos los únicos responsables de esta situación o también tiene una parte considerable de responsabilidad una universidad que imparte un título que faculta a alguien para ejercer la correspondiente profesión sin estar cualificado? ¿Qué cuota de responsabilidad les corresponde a las diversas administraciones autonómicas que tenían que haber controlado la calidad de los trabajos? Como se ha dicho, para bien o para mal, la crudeza de la crisis que vive nuestro país ha puesto fin a esta dramática situación al bo-

rrar de un plumazo el ejercicio de la arqueología privada.

Nos podríamos extender cientos de páginas sobre las situaciones que hemos vivido en estos treinta años, pero sólo incidiremos en dos: la investigación y la conservación. Se acusa a la arqueología de “gestión” de no investigar, pero ya hemos comentado con anterioridad que esa carencia no es un problema exclusivo de la práctica privada de la profesión, sino que es un mal endémico en la arqueología española. Sin embargo es claro que a partir de los años ochenta hasta la actualidad más del 80% de la práctica arqueológica ha ido ligada al mundo privado. Por paradójico que pueda resultar, los arqueólogos que trabajan en el ámbito de la arqueología privada no pueden optar a las ayudas nacionales o autonómicas para investigación, que se ciñen exclusivamente al mundo universitario. No ha habido ninguna voluntad por parte de las administraciones de generar herramientas de conocimiento en el sector privado o en colaboración con el mismo. ¿Cómo se le puede pedir a las empresas de arqueología que investiguen sin dotar al sector de un mínimo de recursos? Los que hemos trabajado en la arqueología privada sabemos que la excavación de los yacimientos y los estudios que ella comporta han sido pagados por los clientes. Sin embargo, los gastos que se generaban en la investigación posterior hubieron de ser asumidos por la misma empresa o, lo que es todavía peor, por los propios arqueólogos. Esto es así incluso en el coste de la divulgación/difusión de los resultados. En este punto resulta pertinente algo tan caro a los políticos de este país como es la comparación con los países de nuestro entorno inmediato. Por poner un ejemplo, y sin ir muy lejos, en Francia los trabajos arqueológicos privados se encuentran integrados en los organismos nacionales (CNRS), siendo allí habitual, y hasta común, que los arqueólogos procedentes

de la arqueología privada se integren en las estructuras estatales de investigación.

En el caso español, ese desinterés del Estado y las Comunidades Autónomas por la investigación generada en la arqueología privada se advierte más claramente en la ausencia de series para publicar las memorias de las respectivas intervenciones: sólo una de ellas tiene un Noticiero más o menos actualizado y ninguna una serie destinada a las Memorias de excavación. En otras palabras, los arqueólogos que trabajan en la gestión privada han tenido que investigar, difundir y publicar sus intervenciones al margen de cualquier respaldo oficial. Es comprensible, aunque no justificable, que muchos de nuestros colegas hayan optado por una actitud, que podríamos definir de unamuniana, que lo fía todo al “¡Que investiguen ellos!”. Lo verdaderamente triste es que “ellos”, es decir, los arqueólogos “oficiales”, los funcionarios de la arqueología, tampoco lo hacen. La prueba es que ninguna universidad o institución española cuenta con una serie prolongada de Memorias de excavación. La excepción que confirma la regla, y por ello si cabe aún más digna de mención, es la serie del Museo de Prehistoria de Valencia. No debemos de olvidar que la Memoria de excavación es el documento que permite la revisión crítica por parte de otros colegas de los trabajos desarrollados en un yacimiento. En realidad, si no hay Memoria la excavación resulta del todo punto estéril, la excavación de un yacimiento resulta totalmente inservible para la investigación.

Por otro lado, la perversidad intrínseca del sistema español se puede apreciar en la lucha despiadada que las diferentes facciones libran en las publicaciones de sus respectivos organismos, donde la autocita suele ser una constante, así como en la frecuente utilización del sistema de evaluadores para eliminar a los oponentes sin atender al criterio de calidad del trabajo.

Aquí se aprovecha el anonimato de los evaluadores para liquidar asuntos pendientes que nada tienen que ver con la investigación. Por el contrario, cuando se escribe para revistas extranjeras es fácil observar la diferencia de la evaluación: donde en España priman la descalificación genérica y los asuntos personales pendientes (o, dicho al cristiano modo, “el navajeo”), allí se hace hincapié en la crítica honrada de los postulados científicos, es decir, en puntualizar sobre las cuestiones tratadas y en matizar la argumentación empleada por los autores.

Respecto a la conservación del patrimonio arqueológico en España, es admirable ver que aún hoy día nuestra sociedad no sea realmente consciente de la ingente cantidad de yacimientos arqueológicos que se han destruido sin que eso haya sido motivo que mueva a reflexión, ni siquiera a las administraciones competentes (universidades, museos y, por supuesto, profesionales de la arqueología) teóricamente encargadas de su custodia. El escenario resulta más desolador todavía si lo enmarcamos en la praxis moderna de la disciplina, dirigida al estudio de los yacimientos desde la óptica de su integración en el paisaje ¿Cuántos paisajes arqueológicos se conservan todavía inalterados en nuestro país? En este campo, al igual que sucedía en el tema de la investigación, se les ha reprochado con frecuencia a los arqueólogos “privados” su aparente docilidad ante dicha situación. Ciertamente los arqueólogos “privados” han sido dóciles en este asunto... pero por desgracia no lo fueron menos que las administraciones autonómicas y locales que en teoría tenían el encargo expreso de proteger ese patrimonio; tampoco menos dóciles que el Estado que consintió que aquellas no cumplieran con su obligación y permitieran la destrucción sin mover un solo dedo por ello, y, por último y con no menos carga de culpabilidad, el mundo universitario, que asistió callado y complaciente a esa orgía de destrucción. Desde el Colegio de

Licenciados de Madrid y desde las Comisiones Permanentes de los Colegios no recibimos apoyo alguno de las instituciones cuando protestamos por la destrucción de la Plaza de Oriente de Madrid, el Paseo de la Independencia de Zaragoza o el Mercado del Born en Barcelona. Cierro es que en estos últimos dos casos se conservaron los espacios urbanos, pero la situación no cambió en lo fundamental. Ni siquiera para espacios emblemáticos como la Vega Baja de Toledo, que se pudieron salvar de su destrucción *in extremis*.

Lamentablemente estos últimos años de crisis no han servido para generar una oposición al modelo que hizo posible que tales actuaciones se produjeran, sino más bien al contrario, se mantiene en pie el hispánico “sostenella y no enmendalla”. Sirva como ejemplo paradigmático que la Comunidad de Madrid ha desarrollado una nueva Ley de Patrimonio que choca frontalmente con la Ley Nacional sobre este tema, así como con los tratados internacionales en relación con la materia. ¡Y sólo ha recibido la firme oposición del Colegio de Licenciados y de algunos movimientos asociativos sin verdadera fuerza institucional! El resto del colectivo asiste al espectáculo con absoluto pasmo amparado en la seguridad que les proporciona el burlderero de su nómina, sin mojarse, ensimismado en su propia inanidad.

No quisiéramos terminar estas reflexiones dejando en el lector un punto de amargura. A pesar de la imagen negativa que sin duda desprenden las líneas precedentes, somos de la opinión que la arqueología española aún podría tener futuro si se produjera un verdadero proce-

so democratizador en el mundo universitario que lo alejara del clientelismo endogámico que ha subvertido su esencia misma. Una universidad reformada donde los profesionales que practiquen la disciplina pudiesen impartir y desarrollar la docencia con un mínimo de rigor científico. Y si, en un proceso paralelo, se originara un cambio legislativo en las Comunidades Autónomas que evitara el estado de indefinición actual, y que abriera definitivamente la investigación a todos los arqueólogos, ya sean “públicos” o “privados”. Por último, pero no menos importante, todavía hay posibilidades de una arqueología moderna si se desarrollara un modelo de conservación a ultranza que garantice la protección del patrimonio arqueológico para que éste, como bien finito que es, no siga mermando a pasos agigantados.

A título personal, sin embargo, la única salida que podemos vislumbrar es la práctica de una arqueología de resistencia, siguiendo una visión moderna de la misma, una conducta ética que promueva la publicación de los resultados obtenidos y su posterior difusión, así como la huida de los grupos banderizos que pululan en el mundo académico con la publicación de estudios exhaustivos y no excluyentes. Somos conscientes que lo que más daño hace al vigente sistema clientelar no es otra cosa que el conocimiento. Y, en este sentido, cada Memoria de excavación, cada ponencia presentada en un Congreso, cada conferencia pronunciada, cada artículo publicado es un mazazo que ayudará a derribar un sistema levantado sobre la ineptitud y el nepotismo. Eso, y esperar al golpe de gracia que lo hunda por completo.